



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

INFORME DE SOL·LICITUD D'EMPARA AMB RELACIÓ AL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

INFORME: 05/2020, de 8 de setembre de 2020.

PETICIÓ: Mesa del Parlament

ASSUMPTE: Sol·licitud d'empara presentada per les diputades Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré i Laura Vilchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, amb relació al dret d'accés a la informació de les sol·licituds d'informació amb número de tramitació següent: 320-01477/12, 320-01748/12, 320-01750/12, 320-01751/12, 320-01816/12, 320-01818/12, 320-01819/12, 320-01820/12, 320-01858/12, 320-01860/12, 320-01861/12, 320-01866/12, 320-01867/12, 320-01868/12, 320-01870/12, 320-01871/12.

I. ANTECEDENTS

1. El dia 21 de juny de 2019 (Reg. d'entrada núm. 41137), la diputada Laura Vilchez Sánchez del Grup Parlamentari de Ciutadans, en exercici del que estableix l'article 6 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) presenta escrit de sol·licitud d'informació al govern en el que demana:

«Copia íntegra de los expedientes de contratación, renovación, modificación o extensión de los contratos ya existentes relativos a la gestión de los centros residenciales de acción educativa (CRAE) y los centros residenciales de educación intensiva (CREI) de Cataluña.» [Número de tramitació 320-01477/12].

2. El dia 27 d'agost de 2019, les diputades Elisabeth Valencia Mimbrero i Noemí de la Calle Sifré del Grup Parlamentari de Ciutadans, en exercici del que estableix l'article 6 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) presenten diversos escrits de sol·licitud d'informació al govern en els que demanen:

2.a. *«De cada uno de los Centros Residenciales de Atención Educativa (CRAE), solicitamos:*

Copia del expediente de contratación íntegro del centro y de la entidad en su caso que lo gestiona dicho durante los últimos cinco años.

Copia del documento que justifique la estructura organizativa los órganos de dirección de la entidad gestionante del centro, así como las actas y los informes de gestión durante los últimos cinco años.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Copia de la memoria económica que acredite la prestación de servicios o adjudicación durante los cinco últimos años.

Copia del organigrama de la plantilla trabajadora de la entidad que gestiona el centro.

Copia del reglamento de funcionamiento interno y el plan educativo del centro.»

[Reg. d'entrada núm. 44581 i Número de tramitació 320-01748/12]

2.b. «De cada uno de los Centros Residenciales de Atención Educativa Intensiva (CREI), solicitamos:

Copia del expediente de contratación y adjudicación a la entidad gestiona el centro en los últimos cinco años.

Copia del documento que justifique la estructura organizativa los órganos de gobierno de la entidad que gestiona el centro durante los últimos cinco años.

Copia de la memoria económica que acredite la prestación de servicios o adjudicación durante los cinco últimos años.

Copia del organigrama de la plantilla trabajadora de la entidad que gestiona el centro.

Copia del reglamento de funcionamiento interno y el plan educativo del centro.»

[Reg. d'entrada núm. 44583 i Número de tramitació 320-01750/12]

2.c. «De cada uno de los Centros de acogida y pisos tutelados, solicitamos:

Copia del expediente de contratación y de la empresa que gestiona el centro en los últimos cinco años.

Copia del documento que justifique la estructura organizativa los órganos de gobierno de la entidad que gestiona el centro, durante los últimos cinco años.

Copia de la memoria económica que acredite la prestación de servicios o adjudicación durante los cinco últimos años.

Copia del organigrama de la plantilla trabajadora de la entidad que gestiona el centro.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Copia del reglamento de funcionamiento interno y el plan educativo del centro»

[Reg. d'entrada núm. 44584 i Número de tramitació 320-01751/12]

3. El dia 9 d'octubre de 2019, la diputada Elisabeth Valencia Mimbrero del Grup Parlamentari de Ciutadans, en exercici del que estableix l'article 6 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) presenta diversos escrits de sol·licitud d'informació al govern en els que demana:

3.a. *«En referencia a la empresa adjudicataria Grup Asteroide 612 Juvanten*

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la empresa adjudicatària Grup Asteroide 612 Juvanten desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de la empresa adjudicataria Grup Asteroide 612 Juvanten, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Memoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la empresa adjudicataria Grup Asteroide 612 Juvanten, desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48091 i Número de tramitació 320-01816/12]

3.b. *«En referencia a la entidad adjudicataria Aldees infantiles SOS Cataluña*

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la entidad Aldees infantiles SOS Cataluña desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de la entidad Aldees infantiles SOS Cataluña desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

iMemoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la entidad Aldees Infantils SOS Cataluña desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48093 i Número de tramitació 320-01818/12]

3.c. *«En referencia a la empresa adjudicataria Actúa SCCL*



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la empresa adjudicatària Actúa SCCL, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de la empresa adjudicataria Actúa SCCL, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Memoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la empresa adjudicataria Actúa SCCL, desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48094 i Número de tramitació 320-01819/12]

3.d. «En referencia a la empresa adjudicataria Crup Saguessa

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la empresa adjudicatària Crup Saguessa desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de la empresa adjudicataria Crup Saguessa desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Memoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la empresa adjudicataria Crup Saguessa, desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48095 i Número de tramitació 320-01820/12]

4. El dia 11 d'octubre de 2019, les diputades Elisabeth Valencia Mimbrero i Noemí de la Calle Sifré del Grup Parlamentari de Ciutadans, en exercici del que estableix l'article 6 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) presenten diversos escrits de sol·licitud d'informació al govern en els mateixos termes que els van presentar en data 27 d'agost i que queden recollits als antecedents 2.

4.a. «De cada uno de los Centros Residenciales de Atención Educativa (CRAE), solicitamos:

Copia del expediente de contratación íntegro del centro durante los últimos cinco años.

Copia del documento que justifique la estructura organizativa de los órganos de dirección de la entidad gestionante del centro, así como las actas y los informes de gestión durante los últimos cinco años.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Copia de la memoria económica que acredite la prestación de servicios o adjudicación durante los cinco últimos años.

Copia del organigrama de la plantilla trabajadora de la entidad que gestiona el centro.

Copia del reglamento de funcionamiento interno y el plan educativo del centro.»

[Reg. d'entrada núm. 48576 i Número de tramitació 320-01858/12]

4.b. «De cada uno de los Centros Residenciales de Atención Educativa Intensiva (CREI), solicitamos:

Copia del expediente de contratación y adjudicación a la entidad que gestiona el centro en los últimos cinco años.

Copia del documento que justifique la estructura organizativa de los órganos de gobierno de la entidad que gestiona el centro durante los últimos cinco años.

Copia de la memoria económica que acredite la prestación de servicios o adjudicación durante los cinco últimos años.

Copia del organigrama de la plantilla trabajadora de la entidad que gestiona el centro.

Copia del reglamento de funcionamiento interno y el plan educativo del centro.»

[Reg. d'entrada núm. 48578 i Número de tramitació 320-01860/12]

4.c. «De cada uno de los Centros de acogida y pisos tutelados, solicitamos:

Copia del expediente de contratación y de la empresa que gestiona el centro en los últimos cinco años.

Copia del documento que justifique la estructura organizativa de los órganos de gobierno de la entidad que gestiona el centro, durante los últimos cinco años.

Copia de la memoria económica que acredite la prestación de servicios o adjudicación durante los cinco últimos años.

Copia del organigrama de la plantilla trabajadora de la entidad que gestiona el centro.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Copia del reglamento de funcionamiento interno y el plan educativo del centro.»

[Reg. d'entrada núm. 48579 i Número de tramitació 320-01861/12]

Així mateix, el dia 11 d'octubre de 2019, la diputada Elisabeth Valencia Mimbrero del Grup Parlamentari de Ciutadans, en exercici del que estableix l'article 6 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC) presenta diversos escrits de sol·licitud d'informació al govern en els que demana:

4.d. *«En referencia a la empresa adjudicataria Font Fregona S.L*

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la empresa Font Fregona S.L, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de Font Fregona S.L, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Memoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la empresa Font Fregona S.L, desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48586 i Número de tramitació 320-01866/12]

4.e. *«En referencia a la empresa adjudicataria La Fundació Acció Social Infancia (FASI),*

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones desde 2010 hasta la actualidad.

Prórrogas de la contrataciones por años y hasta la actualidad.

Copia de los contratos de alquiler de bienes inmuebles desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Copia de la memoria económica presentada por FASI de los centros gestionados desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48587 i Número de tramitació 320-01867/12]

4.f. *«En referencia a la empresa adjudicataria Fundación Plataforma Educativa,*



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la Fundación Plataforma Educativa desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de Fundación Plataforma Educativa desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Memoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la Fundación Plataforma Educativa desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48588 i Número de tramitació 320-01868/12]

4.g. «En referencia a la empresa adjudicatária EDUVIC, SCCL.

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la Fundación EDUVIC SCCL, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de La Fundación EDUVIC SCCL, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Memoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la Fundación EDUVIC SCCL, desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48590 i Número de tramitació 320-01870/12]

4.h. «En referencia a la empresa adjudicataria Amalgama7 S.L

Copia del expediente íntegro de las adjudicaciones a la empresa Amalgama7, S.L, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Relación de contratos de alquiler de los bienes inmuebles por parte de la empresa Amalgama7,S.L, desde el año 2010 hasta 2019 ambos incluidos.

Memoria económica de la actividad de cada uno de los centros gestionados por la empresa Amalgama7, S.L, desde el año 2010 hasta del 2019 ambos incluidos.»

[Reg. d'entrada núm. 48591 i Número de tramitació 320-01871/12]

5. Amb posterioritat, la Mesa del Parlament admet a tràmit les sol·licituds d'informació, i el Secretari General en dona trasllat al Govern per mitjà del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en les dates següents:



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

- En data 1 de juliol de 2019 s'admeten a tràmit les sol·licituds d'informació amb tramitació núm. 320-01477/12 i 320-01748/12 i es dona trasllat al Govern el dia 4 de juliol de 2019 (Reg de sortida núm. 8185).
- En data 3 de setembre de 2019 s'admeten a tràmit les sol·licituds d'informació amb tramitació número 320-01750/12 i 320-01751/12 i es dona trasllat al Govern el dia 5 de setembre de 2019 (Reg de sortida núm. 8980).
- En data 15 d'octubre de 2019 s'admeten a tràmit les sol·licituds d'informació amb tramitació número 320-01816/12, 320-01818/12, 320-01819/12, 320-01820/12, 320-01858/12, 320-01860/12, 320-01861/12, 320-01866/12, 320-01867/12, 320-01868/12, 320-01870/12 i 320-01871/12, i es dona trasllat al Govern el dia 16 d'octubre de 2019 (Reg de sortida núm. 9698).

6. El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sol·licita prorrogar el termini per a la tramesa de la informació, concretament:

- En data 3 de juliol de 2019 presenta sol·licitud de pròrroga de la iniciativa 320-01477/12 i en data 23 de juliol de 2019 se li concedeixen 7 dies hàbils improrrogables que fineixen el 6 de setembre de 2019.
- En data 17 de juliol de 2019 presenta sol·licitud de pròrroga de la iniciativa 320-01748/12 i en data 18 de juliol de 2019 se li concedeixen 7 dies hàbils improrrogables que fineixen el 31 de juliol de 2019.
- En data 13 de setembre de 2019 presenta sol·licitud de pròrroga de les iniciatives 320-01750/12 i 320-01751/12, i en data 30 de setembre de 2019 se li concedeixen 7 dies hàbils improrrogables que fineixen el 19 d'octubre de 2019.
- En data 17 d'octubre de 2019 presenta sol·licitud de pròrroga de les iniciatives 320-01816/12, 320-01818/12, 320-01819/12, 320-01820/12, 320-01858/12, 320-01860/12, 320-01861/12, 320-01866/12, 320-01867/12, 320-01868/12, 320-01870/12 i 320-01871/12, i en data 8 de novembre de 2019 se li concedeixen 7 dies hàbils improrrogables que fineixen el 22 de novembre de 2019.

7. En data 22 de novembre de 2019 (Reg. d'entrada núm. 52182), el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, en compliment de les referides sol·licituds d'informació, presenta un escrit de resposta conjunta, atès que les iniciatives presentades per les diputades es refereixen totes elles a l'àmbit de la contractació pública i la gestió dels serveis de la DGAIA.

En la resposta, el conseller convida a les diputades a mantenir una reunió a la seu del Departament per poder accedir a la informació respectivament sol·licitada atesa la naturalesa, la complexitat i el volum de la informació requerida.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Dita resposta es trasllada a les diputades mitjançant ofici del secretari general el dia 27 de novembre de 2019 (Reg. sortida núm. 10690).

8. Les diputades, davant la insatisfacció de la resposta que els dona el Govern, presenten a la Mesa del Parlament en data 28 de novembre de 2019 (Reg. d'entrada núm. 52673), una sol·licitud de requeriment perquè se'ls faciliti la informació demanada, de conformitat amb el que estableix l'article 8.2 del RPC, en el termini improrrogable de 3 dies. Concretament, les diputades al·leguen *«Que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 6.3 del Reglamento del Parlamento y no ha dado cumplimiento a mi demanda de información»* i *«no podemos compartir los argumentados por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, y considera que el Govern ha vulnerado el derecho de acceso a la información, denegándonos el acceso a la información solicitada»*.

9. La Mesa del Parlament, per mitjà de l'Acord de 3 de desembre de 2019, sol·licita requerir al Govern, autoritat responsable que ha de lliurar la informació, a que compleixi amb el deure de facilitar la informació en el termini improrrogable de tres dies, d'acord amb el que estableix l'article 8.2 del RPC i es dona trasllat al Govern el dia 4 de desembre de 2019 (Reg. de sortida núm. 10765). En data 5 de desembre de 2019, el Govern rep el dit requeriment de la Mesa del Parlament (Reg. d'entrada núm. 0976E/245).

10. El Govern en compliment del requeriment efectuat per la Mesa del Parlament lliura l'11 de desembre de 2019 (Reg. d'entrada núm. 53695) una segona resposta en què es reafirma en la resposta inicialment presentada i afegeix l'observació que *«cal tenir en compte que els expedients que sol·liciten poden contenir informació relativa a menors d'edat i, tal com marca la normativa vigent, hem de garantir la protecció de l'honor, la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge dels infants i adolescents»*. La Mesa del Parlament en data 17 de desembre de 2019, acorda prendre'n nota i el secretari general dona trasllat de dita resposta a les diputades el 18 de desembre de 2019 (Reg. de sortida núm. 11141).

11. En data 13 de gener de 2020 (Reg. d'entrada núm. 55222) i davant la resposta al requeriment realitzada pel Govern, presenten un escrit on acoten el període temporal de la informació sol·licitada als anys 2014 a 2019. La Mesa del Parlament en data 21 de gener de 2020, acorda prendre'n nota i el secretari general dona trasllat de la petició de les diputades el 23 de gener de 2020 (Reg. de sortida núm. 11500), trasllat que és rebut pel Govern el dia 24 de gener de 2020 (Reg. d'entrada núm. 0976E/10).

12. En resposta a la petició de les diputades, el 3 de febrer de 2020 (Reg. d'entrada núm. 57415) el Govern presenta un escrit en què es referma en la resposta donada en la petició de requeriment. El Departament continua considerant que sol·licitar els expedients de contractació dels últims cinc anys continua essent un volum de documentació complexa de gestionar. Per això, manté la seva proposta de rebre les diputades a les dependències del Departament per examinar *in situ* la documentació.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

La Mesa del Parlament en data 11 de febrer de 2020 pren nota de la informació presentada pel Departament i n'acorda donar trasllat a les diputades mitjançant els oficis següents:

- En data 12 de febrer de 2020 es dona trasllat de la resposta del Govern amb relació a les sol·licituds de documentació 320-01748/12, 320-01750/12, 320-01751/12, 320-01816/12, 320-01818/12, 320-01819/12, 320-01820/12, 320-01858/12, 320-01860/12, 320-01861/12, 320-01866/12, 320-01867/12, 320-01868/12, 320-01870/12 i 320-01871/12 (Reg. sortida núm. 11932)
- En data 12 de febrer de 2020 es dona trasllat de la resposta del Govern amb relació a la sol·licitud de documentació 320-01477/12 (Reg. sortida núm. 11933)

13. Amb motiu de la manca de lliurament de la documentació sol·licitada, les diputades Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré i Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, en exercici del que estableixen els apartats 4 i 5 de l'article 8 del Reglament del Parlament, formulen en data 19 de juny de 2020 (Reg. d'entrada núm. 69450) la seva petició d'empara en el sentit que sol·liciten a la Mesa del Parlament que sotmeti a l'òrgan de garantia del dret d'accés a la informació pública de la Cambra, la falta de resposta a les diferents sol·licituds d'informació i documentació abans esmentades, i que es pronunciï sobre la fonamentació del dret d'accés a la informació i adopti una decisió definitiva en relació al deure de l'autoritat responsable de facilitar la informació demanada a aquestes sol·licituds d'informació i documentació.

Les diputades en qüestió fonamenten el seu dret d'empara en què en les reiterades respostes del Govern s'aludeix «[...] *al gran volumen de información sol·licitada y al carácter de datos personalísimos de los menores, esta parte no puede coincidir en dicho extremo ya que en nuestras peticiones solicitábamos expresamente que se nos entregue la documentación contractual y obligatoria que entendemos se tiene que tener de acuerdo a la normativa vigente referente a los datos de los menores este grupo en ningún momento ha solicitado nada que no se adecue a la normativa referente a la protección de datos personales.*» I per tant, consideren que «[...] *esta información que recoge la documentación obligatoria por ley que deben aportar las empresas y fundaciones que trabajan para el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, deben disponer de esta documentación y deben tenerlo en un formato que se posible de consultar sin tener que desplazarse ni tener un tiempo limitado para poder disponer de la información, es imposible que esta información no esté preparada y no sea accesible en formato online.*

La administración tiene la obligación, salvando la debida protección de los posibles datos personales contenidos en el mismo, por lo que no debe tener inconveniente alguno en facilitar la documentación con gran volumen.»



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

14. Finalment, en data 25 de juny de 2020, la Mesa del Parlament acorda admetre a tràmit la sol·licitud d'empara de les diputades presentada el dia 19 de juny de 2020 (Reg. entrada núm. 69450) i, per tant, de conformitat amb l'article 8.5 del Reglament del Parlament, abans d'adoptar un acord sobre l'empara sol·licitada, demanar informe a l'Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (OGDAIP) perquè l'emeti en el termini de trenta dies abans que la Mesa es pronunciï sobre la fonamentació del dret d'accés a la informació de la diputada. En data 29 de juny de 2020 (Reg. sortida núm. 13444), mitjançant ofici del secretari general, es dona trasllat de l'encàrrec a l'OGDAIP.

II. OBJECTE DE LA PETICIÓ

Una vegada analitzats els antecedents els quals ens acabem de referir i abans de procedir a l'anàlisi sobre la fonamentació del dret d'accés a la informació que afecta la documentació objecte de l'empara sol·licitada per les diputades Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré i Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, és necessari concretar l'objecte sobre el qual s'ha de projectar l'anàlisi amb relació a la fonamentació del dret d'accés a la informació de la diputada.

En aquest sentit, i per a poder acotar amb exactitud l'objecte del present informe des del punt de vista material és necessari fer constar dues circumstàncies:

De conformitat amb els antecedents primer, segon, tercer i quart les diputades presenten diverses sol·licituds de documentació que fan referència a l'àmbit de la contractació pública i la gestió dels serveis de la DGAIA amb relació als anys 2010 a 2019.

No obstant, vistes les argumentacions donades pel govern, tant en la seva resposta inicial com en la del requeriment, tal i com s'esmenta en l'antecedent onzè, el 13 de gener de 2020, les diputades presenten escrit a la Mesa del Parlament on acoten el període temporal de les informacions sol·licitades als anys 2014 a 2019.

De la lectura de l'escrit d'empara es desprèn que les peticionàries manifesten que s'ha vulnerat el seu dret d'accés a la informació atès que el Govern no ha facilitat la informació demanada en cap dels períodes requerits.

Per tant, es considera que l'objecte del present informe afecta totes les tramitacions incloses en la petició d'empara formulada per les diputades Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré i Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans entre els anys 2014 a 2019.

III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1. En diversos informes, (Informes OGDAIP 11/2019 CJ2; 14/2019 CJ 2; 15/2019 CJ 2 i 4/2020 CJ 1.4) aquest òrgan ha remarcat de manera reiterada que el dret d'accés a la informació



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

dels diputats i diputades forma part del contingut essencial de la funció parlamentària que exerceixen. El dret d'accés a la informació es un dret que s'insereix en el seu *ius in officium* i està, per tant, directament connectat amb el dret fonamental de participació política de l'article 23.2 CE (STC 220/1991, de 25 de novembre).

La inclusió del dret d'accés a la informació en el *ius in officium* dels diputats i diputades implica que el seu exercici ho es d'un dret fonamental. Tanmateix, també implica l'exercici d'una funció parlamentària en la mesura que el dret a demanar informació al Govern s'ha de considerar com un instrument per poder exercir adequadament les funcions d'impuls i de control de l'acció política i de govern.

Una conseqüència molt important del que s'acaba d'exposar es la especial protecció que s'ha de donar a l'exercici del dret d'accés i la necessitat d'interpretar de manera especialment restrictiva els límits que eventualment el poden afectar. En aquest sentit, cal assenyalar que l'article 7 RPC reconeix la existència d'aquest límits, però fa al mateix temps la especial precisió que el dret d'accés té sempre caràcter preferent respecte de les restriccions legals que l'afectin.

La integració del dret d'accés a la informació dels membres del Parlament en el seu *ius in officium*, la seva condició de dret fonamental especialment protegit i el seu caràcter preferent respecte de la concurrència d'eventuals limitacions que el puguin afectar, obliguen a fer una tasca interpretativa del RPC i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que cerqui sempre la major compatibilitat entre els límits ocasionalment aplicables i el caràcter prioritari que en aquest cas té el dret d'accés. Es aquesta una diferència important respecte del dret d'accés a la informació que poden exercir els ciutadans amb caràcter general, que obliga a ser especialment rigorosos en la apreciació de les possibles restriccions a que pot veure's sotmès el dret d'accés dels parlamentaris.

Amb relació a aquesta qüestió, es important recordar que existeix una jurisprudència que emfatitza aquest caràcter del dret en seu parlamentària, donant preferència al contingut dels Reglaments parlamentaris per sobre de les lleis de transparència i accés a la informació (Sentència del TSJC 198/2020, de 4 de juny). En la mateixa direcció, la doctrina de l'Òrgan de Garantia de la Generalitat de Catalunya reconeix als càrrecs electes locals una menor subjecció als límits establerts per la Llei de transparència i accés a la informació, degut al caràcter preferent que s'ha de donar a l'exercici d'un dret de participació política que té el seu origen en la legislació de règim local (Resolució 77/2017) i en els nostres Informes de sol·licitud d'emparedament (Informes OGDAIP 4/2020 CJ) Òbviament, aquesta conclusió val igual o més encara per al membres del Parlament de Catalunya.

Les consideracions que s'acaben de fer son importants per interpretar correctament l'abast de de l'article 7 RPC quan diu que el dret d'accés només es pot limitar per la concurrència d'alguna de les restriccions que estableix la legislació reguladora del dret d'accés a la informació pública. El caràcter preferent del dret d'accés que contempla el mateix precepte



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

i la seva consideració com a part integrant del *ius in officium* dels parlamentaris, porta a la conclusió que en aquest cas no es possible aplicar els límits generals que preveu la legislació de transparència i accés a la informació pública amb el mateix abast i extensió que es poden aplicar als ciutadans amb caràcter general.

Ans al contrari, la remissió que contempla l'article 7 RPC a les restriccions establertes a la legislació reguladora del dret d'accés a la informació, no permet actuar traslladant sense més a l'àmbit parlamentari els límits establerts per la legislació de transparència i accés a la informació, sinó que requereix articular un sistema de ponderació d'interessos que tinguin en compte quatre aspectes essencials (GAIP Dictamen 1/2012, de 14 de maig, fonaments 2 i 4) En primer lloc el d'assumir sempre i com a punt de partida el caràcter preferent del dret d'accés a la informació dels membres del Parlament; en segon lloc, aplicant un criteri restrictiu en la interpretació i aplicació dels límits que eventualment poden impedir o condicionar l'accés a la informació; en tercer lloc, intentar fer compatible al màxim possible el dret d'accés amb la concurrència de restriccions oferint, si es necessari, solucions *ad hoc* que permetin conciliar els interessos en conflicte; i en quart lloc, traslladant al destinatari de la sol·licitud d'informació (el Govern) la càrrega de tenir que motivar de manera suficient, clara i raonada la concurrència de causes limitadores del dret d'accés i dels efectes que això pot comportar.

2. Després d'un període de funcionament que arranca amb la seva creació l'any 2017 aquest Òrgan de Garantia del Dret d'Accés no pot fer altra cosa que constatar, en línies generals, com el marc referencial que s'acaba d'exposar no ha estat plenament assumit fins al moment present pel Govern quan es tracta de tramitar les demandes d'accés a la informació presentades pels diputats i diputades a l'empara del dret que els reconeix l'article 6 RPC. No es aquesta una valoració subjectiva que no correspon fer en aquest cas, si no una conclusió objectiva derivada dels fets analitzats en els informes emesos fins el moment present.

L'experiència d'actuació d'aquest òrgan de garantia posa en relleu que, llevat de excepcions molt concretes i puntuals i sens perjudici dels casos en què s'ha donat resposta satisfactòria a les sol·licituds d'informació, no es apreciable en el capteniment del Govern la plena convicció i la necessitat de tenir que resoldre les sol·licituds d'accés a la informació presentades pels membres del Parlament d'acord amb els paràmetres d'aproximació i resolució anteriorment exposats. Es aquest un dèficit sobre el qual es necessari advertir i que caldria corregir quan abans millor per tal de situar la resolució de les sol·licituds d'accés a la informació dins unes coordenades més ajustades al que estableix el Reglament del Parlament.

Tanmateix, també es necessari advertir de la importància que té per fer-ho possible, la manera com s'exerceix el dret d'accés a la informació pública. L'article 6.1 RPC no impedeix que es puguin presentar sol·licituds que tinguin per objecte un volum de documentació



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

ampli o extens. Però això no implica, com succeeix amb tots els drets, que el seu exercici no s'hagi de fer dins un àmbit raonable i proporcional al que es desprèn del seu contingut i que la finalitat perseguida també s'hi ajusti. Per aquest motiu, el sol·licitant té sempre l'obligació de concretar i ser el més precís possible sobre quin es l'objecte de les sol·licituds d'accés a la informació. Així com també es exigible que aquest exercici intenti ser sempre el més selectiu i ponderat possible sense convertir-se en un instrument que, de facto i més enllà de la obtenció d'una informació concreta, traslladi al Govern i a l'Administració una càrrega extraordinària i desproporcionada de gestió en perjudici de la eficiència dels recursos públics disponibles.

3. Aquest empara té com a referent diverses sol·licituds d'informació presentades per diputades del grup parlamentari de Ciutadans. Inicialment les sol·licituds es van presentar per separat, però el Govern les va agrupar en donar una resposta conjunta a totes elles. Aquesta agrupació ha estat acceptada implícitament per les diputades, atès que totes les seves actuacions posteriors s'han produït prenent també de manera conjunta totes les sol·licituds.

Les sol·licituds d'informació es refereixen a dades relatives als expedients de contractació de la gestió de centres residencials de acció educativa (CRAE), de centres residencials d'educació intensiva (CREI), de centres d'acollida i pisos tutelats i de procediments d'adjudicació a entitats o empreses, tots ells relacionats amb l'àmbit d'actuació de la Direcció General d'atenció a la infància i a la adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Algunes sol·licituds d'informació també demanen dades addicionals sobre els contractes de lloguer de bens immobles per part de les adjudicatàries, la memòria econòmica de l'activitat de cadascun dels centres gestionats per l'adjudicatària, la estructura organitzativa de la entitat que gestiona el centre, l'organigrama de la plantilla, el reglament de funcionament intern i el pla educatiu del centre.

En qualsevol cas, es tracta d'informació directament relacionada amb la prestació d'activitats i de serveis que son competència de la Administració de la Generalitat. Malgrat que la prestació dels serveis i les activitats concernides es faci en aquest cas per mitjà d'entitats privades, el caràcter públic de la informació es inqüestionable per la íntima connexió que té amb la prestació d'un servei públic. Cal assenyalar que el Govern no ha fet cap objecció sobre aquesta qüestió.

En la primera resposta donada a les sol·licituds d'informació (22 de novembre de 2019), el Govern va considerar que, atesa la naturalesa de la informació requerida, la seva complexitat i el seu volum, l'accés a la informació requeria una tasca prèvia de concreció dels expedients interessats per la qual cosa era necessari concertar prèviament una reunió de les diputades amb els responsables del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Aquesta proposta no va ser acceptada per les diputades, les quals, en data 28 de novembre de 2019, tal com consta en l'antecedent 8, van demanar a la Mesa del Parlament que requerís al Departament per tal que facilités la informació demanada en format electrònic, d'acord amb el que estableix l'article 6.2 del RPC.

En la segona resposta donada pel Govern (11 de desembre de 2019) s'insisteix en la necessitat de concretar els expedients interessats en una reunió prèvia amb els responsables del departament i s'afegeix la consideració addicional, no formulada en la resposta inicial, que els expedients que es sol·liciten poden contenir informació relativa a menors d'edat de manera que, tal com marca la normativa vigent, cal garantir la protecció de l'honor, la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge dels infants i adolescents.

Davant d'aquesta nova resposta, les diputades van presentar un nou escrit a la Mesa tornant a reclamar l'accés a la informació sol·licitada. En aquest escrit no s'accepta la proposta de concertar una reunió amb el Departament com a fórmula per satisfer el dret a accedir a la informació. Un posicionament que les diputades justifiquen en el fet que el Departament disposa necessàriament de les dades de la contractació que realitza amb empreses i entitats per portar a terme la gestió dels serveis de la seva competència i que no hi ha d'haver cap obstacle perquè aquesta informació estigui preparada per ser accessible en format *online*. En aquest mateix escrit, les diputades rebaixen el període temporal indicat en les sol·licituds als darrers cinc anys (2014-2019) per tal de simplificar la demanda d'accés a la informació.

En una tercera resposta (3 de febrer de 2020) el Govern expressa que la seva voluntat no es la de negar el dret d'accés a la informació que les diputades tenen reconegut per l'article 6 RPC. Tanmateix, torna a insistir en la necessitat de verificar el dret d'accés a la informació mitjançant la prèvia concreció dels expedients que interessin a les diputades en una reunió amb els responsables del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. I insisteix de nou en que els expedients que es sol·liciten poden contenir informació relativa a menors d'edat que ha d'estar protegida.

Com a conseqüència d'aquesta darrera resposta, les diputades tornen a expressar el seu desacord amb la fórmula proposada pel Govern i demanen empara a la Mesa d'acord amb el que estableix l'article 8.4 i 5 RPC. Això determina la intervenció d'aquest òrgan de garantia del dret d'accés a la informació pública amb la finalitat d'emetre l'informe preceptiu a que es refereix aquest precepte.

4. L'article 6 RPC estableix que la informació requerida pels diputats i diputades s'ha de facilitar per via electrònica, preferentment, o en suport paper. Aquesta es la fórmula concreta i específica de lliurament de la informació quan es tracta de l'exercici del dret d'accés quan s'exerceix en l'àmbit parlamentari.

Cal assenyalar que l'article 10 RPC preveu la possibilitat de que l'accés a la informació es faci de manera presencial a les dependències de l'Administració. Tanmateix, aquesta possibilitat



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

només es contempla en el Reglament com una facultat que pot exercir el diputat o diputada, però no com a una opció de resposta al dret d'informació que estigui a l'abast de l'Administració i que aquesta pugui utilitzar com a alternativa a les fórmules que determina l'article 6 RPC.

Les respostes donades pel Govern en el cas que aquí ens ocupa no s'ajusten a les previsions de l'article 6 RPC. De fet, introdueixen una fórmula alternativa de resposta al dret d'accés a la informació que no pot ser acceptada perquè comportaria reconèixer a l'Administració una facultat per determinar un model o sistema de resposta diferent del que preveu el Reglament.

Les respostes del Govern supediten el dret d'accés a la informació a tenir una reunió amb els responsables del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als efectes de concretar els expedients que els interessin. La resposta al dret d'accés no es, per tant, el lliurament de la informació sol·licitada tal i com estableix l'article 6 RPC, si no una solució *ad hoc* que, en la pràctica, condiona la obtenció de la informació a un tràmit previ que s'estableix com una càrrega que han de complir les diputades i que tampoc garanteix, per si mateix, que el dret es pugui satisfer en tota la integritat que es desprèn de les sol·licituds d'informació presentades. Aquesta forma de procedir no s'ajusta al que estableix el Reglament del Parlament i no es pot considerar, per tant, com una resposta acceptable per part de l'Administració.

La supeditació del dret d'accés a una reunió per tal de concretar el expedients que interessin a les diputades no es únicament una fórmula inadequada per complir el deure de lliurar la informació. També denota una percepció que podria tenir l'Administració que les sol·licituds d'informació s'han formulat en termes imprecisos o massa genèrics i que es necessari demanar a les diputades que concretin més l'abast de les seves peticions. Tanmateix, de la lectura de les sol·licituds d'informació no es desprèn que existeixi cap imprecisió. L'objecte de les sol·licituds es clar i concret, sens perjudici que el seu abast i volum siguin extensos en quant a la informació requerida. Però això seria un problema diferent al de una hipotètica manca de precisió de l'objecte de les sol·licituds que fes impossible atendre el dret.

De la lectura de les respostes del Govern, es desprèn tanmateix que el problema no seria tant una manca de concreció i precisió de les sol·licituds, si no la complexitat i el volum que té la informació requerida. D'aquesta manera, la reunió proposada per "concretar" els expedients que interessin a les diputades es plantejaria com una fórmula per determinar i, si escau, simplificar l'objecte del dret d'accés. En aquest sentit, es podria entendre que l'Administració al·lega implícitament com a obstacle al lliurament de la informació el fet que la aquesta requereix una tasca especialment complexa de elaboració. La reunió amb les diputades tindria així la finalitat d'assolir un pacte o acord que permetés resoldre aquest problema.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

Amb relació a aquesta qüestió cal tenir en compte diversos aspectes. En primer lloc, que no es pot confondre el volum de la informació requerida amb el fet que la resposta precisi d'una tasca d'elaboració o reelaboració de la informació. El volum de la informació pot ser gran, però això no sempre determina que calgui fer una tasca especial de cerca i de elaboració de la informació per poder satisfer una demanda d'accés. En el cas que aquí ens ocupa, les sol·licituds d'informació es refereixen a l'àmbit de la contractació pública i a dades directament relacionades amb la gestió de serveis públics per part d'entitats o empreses. Es tracta de dades que estan especialment formalitzades per raons administratives de les quals disposa l'Administració i que no han de requerir cap esforç d'elaboració, més enllà de les dificultats que imposa la extensió o el volum d'informació requerida. Cal assenyalar que la mateixa legislació de transparència i accés a la informació obliga a l'administració a facilitar per mitjà del Portal de Transparència un nombre molt important de dades en matèria de contractació pública; i que la existència del Registre de Contractes constitueix un important instrument de coneixement i sistematització de la informació que afecta a l'activitat contractual de l'Administració i el seu desenvolupament. En conseqüència, no es pot considerar que per la naturalesa de l'objecte que tenen les sol·licituds, l'Administració hagi de tenir especial dificultat per identificar, recopilar i facilitar les dades requerides amb la extensió que es desprèn de les mateixes sol·licituds.

En segon lloc, cal assenyalar que en l'àmbit del dret d'accés a la informació dels diputats s'ha de ser especialment restrictiu en la interpretació dels límits oposables per l'Administració per denegar o condicionar el dret d'accés. Aquests límits s'han de compatibilitzar amb el caràcter preferent del dret d'accés d'acord amb l'article 7 RPC i s'han de situar normalment en la possible concurrència dels límits "materials" que indica la legislació de transparència i accés a la informació. I en aquest sentit, es important remarcar que aquesta legislació no contempla la complexitat o el volum de la informació com un límit material a l'accés, si no només com una possible causa d'inadmissió de les sol·licituds. El volum o la extensió de la informació, o la necessitat que l'Administració hagi de fer una tasca de elaboració o reelaboració complexa per atendre una sol·licitud d'informació, ha de cedir davant el caràcter preferent del dret d'accés a la informació que s'exerceix en seu parlamentaria, llevat de supòsits veritablement excepcionals.

D'acord amb el que s'acaba d'exposar, cal concloure que la fórmula proposada per atendre les sol·licituds d'informació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no es acceptable d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 RPC. En conseqüència, tal i com demanen les diputades, aquestes tenen dret a que la informació requerida se'ls faciliti directament en format electrònic, sense tenir que complir la condició que s'indica en les respostes donades pel Departament.

5. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també al·lega que els expedients que es sol·liciten poden contenir informació relativa a menors d'edat i que, per tant, cal que es



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

garanteixi la protecció de l'honor, la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge dels infants i adolescents.

Cal assenyalar que aquesta objecció no va ser formulada per l'Administració en la seva primera resposta i apareix després com un argument complementari quan les diputades insisteixen en el seu dret a obtenir la informació demanada en format electrònic. També cal advertir que aquesta nova objecció no es motiva ni s'argumenta en cap circumstància concreta, si no que es merament preventiva. En aquest sentit es significatiu que la resposta es limiti a indicar que els expedients "poden" contenir informació protegida, però no es doni cap raó concreta que la sustenti. Com hem exposat reiteradament en informes anteriors (Informes OGDAIP 2/2020 CJ 3; 15/2019 CJ 4; 3/2020 CJ 2 i 4/2020 CJ 2.4) l'Administració té la càrrega d'acreditar la eventual concurrència d'un límit material que afecti al dret d'accés davant d'una demanda determinada i resulta evident que aquest requisit no es compleix quan es respon amb una simple hipòtesi que no es fonamenta en cap fet o circumstància concreta o identificable. Un altra aspecte a considerar es la possibilitat de garantir, si fos el cas, el caràcter anònim de les dades, una possibilitat que les mateixes diputades invoquen en un dels seus escrits i que no consta que hagi estat considerada per l'Administració.

Amb independència del que s'acaba d'exposar, la concurrència d'aquest límit material al dret d'accés s'ha de posar directament en connexió amb l'objecte concret que tenen les sol·licituds d'informació. La lectura de les mateixes posa en relleu que no es demana cap expedient que afecti a infants o adolescents o que pugui contenir dades personals especialment protegides. El que es demana son els expedients de contractació de la gestió de centres CRAE i CREI i dades relacionades amb els aspectes organitzatius, de funcionament i econòmics de la gestió realitzada per les entitats o empreses adjudicatàries. En cap cas es demana informació sobre expedients que afectin directament als menors o adolescents que son usuaris d'aquests serveis. Per tant, no es pot apreciar raonablement que l'accés a la informació pugui afectar o comprometre dades personals d'aquests usuaris.

IV. CONCLUSIÓ

Atesos els antecedents de fet i els raonaments continguts en les consideracions jurídiques precedents, els sotasignats, constituïts en l'òrgan de garantia del dret d'accés a la informació pública del Parlament de Catalunya a que es refereix l'article 219 del Reglament, ens pronunciem en favor del dret d'accés a la informació de les diputades Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré i Laura Vilchez Sánchez, del Grup parlamentari de Ciutadans, amb relació a la documentació i informació demanada en les sol·licituds amb número de tràmit 320-01477/12, 320-01748/12, 320-01750/12, 320-01751/12, 320-01816/12, 320-01818/12, 320-01819/12, 320-01820/12, 320-01858/12, 320-01860/12,



PARLAMENT DE CATALUNYA

Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

320-01861/12, 320-01866/12, 320-01867/12, 320-01868/12, 320-01870/12 y 320-01871/12.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020

Anna Casas i Gregorio

Lletrada

Directora del Departament
de Gestió Parlamentària

Antoni Bayona Rocamora

Lletrat

Director de la Direcció
d'Estudis Parlamentaris

Blanca Martínez Nieto

Cap de l'Àrea d'Arxiu

Direcció d'Estudis
Parlamentaris.